

Reflexiones en torno a la relación inexistente entre la izquierda partidista y el sindicalismo mexicano

Aldo Muñoz Armenta*

El propósito de este documento es dar algunas respuestas a la pregunta ¿por qué la izquierda partidista en México no ha conseguido establecer alianzas, -y eventualmente representar políticamente- a los trabajadores organizados aún después de la alternancia en la presidencia? Esto es significativo si se considera que en el marco de las instituciones de la representación política de los países democráticos, los sindicatos han sido y son parte importante de la base de apoyo social y electoral de los partidos de izquierda.

Las hipótesis que aquí se ensayan, establecen que, por un lado, el partido emblemático de la izquierda, el PRD, enfrenta serios problemas de organización interna, de institucionalización de liderazgos y de definición programática que afectan su capacidad de ganar elecciones y de convertirse en una alternativa viable para los trabajadores y sus organizaciones; por otro lado, cuenta el peso que le otorga el modelo de regulación laboral mexicano al Presidente de la República para intervenir legalmente en la vida interna de las organizaciones laborales, lo cual dificulta su independencia política e ideológica.

Más aún, el PRD no tiene posibilidades de ofrecer los líderes sindicales y a los trabajadores un espacio político “seguro” para que ocupen cargos de representación popular. Al mismo tiempo, los dirigentes sindicales, eventualmente interesados en este partido, no cuentan con el capital político necesario para volverse promotores eficaces del voto perredista. Es decir, ninguno de estos actores tiene incentivos para formalizar una alianza permanente.

Frente a estas condiciones, los acercamientos entre los “sindicalistas” y el PRD, ha tenido un carácter coyuntural, casi exclusivamente en tiempos electorales y en función del impulso de candidaturas específicas. Es decir, “el sindicalismo” mexicano y la izquierda partidista no han compartido ni antes ni después de la alternancia del año 2000 una agenda

* Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Correo electrónico: aldomunozarmenta@gmail.com

convergente y permanente en los temas relacionados con el mundo del trabajo. Probablemente porque el partido es más joven que las organizaciones laborales y sus cuadros provienen de grupos sociales distintos al quehacer sindical; también porque su base de apoyo original son líderes sociales ubicados en el movimiento urbano, en la lucha agraria o en el ámbito académico.

El presente trabajo se divide en tres apartados. En el primero se hace una revisión sobre los orígenes del PRD como fuerza partidista, en donde se destaca la heterogeneidad de grupos y corrientes que lo conforman en su origen, generando en principio una apuesta por cohesionar a “las” izquierdas, pero que la postre resultó en un fuerte divisionismo porque esta diversidad no se acompañó de la construcción de un esquema institucional partidista que cohesionara a los diferentes grupos. En este mismo apartado se hace un recuento de cuáles son las debilidades organizativas del PRD para generar decisiones eficientes y de consenso. En este punto se destacan los problemas para crear una estructura territorial de tipo “nacional” y para construir órganos de gobierno fuertes y centralizados que tomen decisiones eficientes en materia de candidaturas y estrategias electorales.

En el segundo apartado, se hace un recuento de las dificultades que tienen las organizaciones sindicales, a pesar de la alternancia, para conseguir su independencia política y eventualmente sumarse al PRD o cualquier otra opción partidista. Sobre el particular, se destaca que las posibilidades legales que tiene el titular del Poder Ejecutivo para intervenir en la vida interna de las organizaciones laborales, complica en términos reales y prácticos las opciones para que se forme una amplia corriente de sindicatos de izquierda que pudieran crear un marco de intercambio permanente entre el perredismo y los trabajadores.

En el tercer apartado se hace una revisión de los perfiles de los legisladores perredistas que participaron en las LVII, LVIII, LIX y LX legislaturas de la Cámara de Diputados, con el propósito de identificar el peso de la relación de este partido con el mundo sindical y sus alcances representativos. Al respecto, los datos establecen que la mayor parte de los diputados del PRD proceden de orígenes diferentes a la esfera de los trabajadores organizados. Si bien los “sindicalistas” son un grupo significativo en el transcurso de las legislaturas, están lejos de ser predominantes en comparación con otros grupos, como los líderes campesinos, estudiantiles o incluso empresariales.

1. Los orígenes del PRD y la ausencia del sindicalismo

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se fundó en 1989 como consecuencia de la escisión de la fracción nacionalista del Partido Revolucionario Institucional (PRI), provocada por el giro neoliberal en las políticas de los gobiernos surgidos de este partido. Este grupo separado del PRI, autodenominado *Corriente Democrática*, logró una alianza electoral con la izquierda política y social, formada por diversas fuerzas partidistas y con organizaciones provenientes de las luchas sociales, lo cual le permitió participar en las elecciones presidenciales de 1988 a través del Frente Democrático Nacional (FDN) postulando como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas.

Esta experiencia electoral fue la más exitosa en la izquierda mexicana hasta entonces registrada, al ubicarse en la segunda posición de las elecciones presidenciales. El proceso de moderación y fusión de la izquierda política que operó a principios de los años ochenta, así como la participación de varias organizaciones y movimientos sociales en la campaña de 1988, fueron circunstancias determinantes en la conformación del PRD.

El arrastre político-electoral de Cuauhtémoc Cárdenas sirvió como eje articulador del partido, esto fue importante porque el PRD en sus inicios se formó de grupos políticos diferentes en términos ideológicos y programáticos. Cárdenas permitió superar la carencia institucional en los inicios del partido en lo que respecta a mecanismos de acuerdo y cooperación entre grupos. Sin más, Cárdenas concentró las decisiones más importantes del PRD, tales como el tipo de relación a seguir con el gobierno, quiénes debían ocupar las principales áreas de decisión y quiénes debían ocupar el liderazgo nacional (tanto la presidencia como la secretaría general). Ello fue así de 1989 a 2002.

En este sentido, desde sus orígenes, este partido se integró por diferentes grupos e individuos con intereses diversos. La lógica en la que se desenvuelven dichos grupos es un entramado escasamente ideológico y fuertemente personalista con connotaciones clientelares. Así, la dinámica interna del PRD consiste en que una parte importante de las decisiones se toman fuera de la estructura formal del partido a través de la negociación entre los líderes de las diferentes corrientes (Vivero, 2006).

Ello es así porque el PRD es un partido creado por varios grupos políticos que se pueden sintetizar en tres bloques: los expriístas a través de la *Corriente Democrática*, la izquierda partidista tradicional encabezada por los liderazgos que conformaban el Partido

Mexicano Socialista (PMS) y un vasto grupo de organizaciones y movimientos sociales. Ante este crisol de expresiones políticas y sociales es de suponer que la conformación del partido se exprese en diversas corrientes. Al revisar cuáles son esos grupos y lo que representan, se puede constatar que lo “laboral” y lo “sindical” quedó subsumido a otras reivindicaciones más generales de orden socioeconómico.

2. La estructura organizativa y los problemas en la selección de candidatos

Los estatutos del PRD dan cuenta de una estructura organizativa muy heterogénea en lo que concierne su composición grupal. En principio, ello podría dar pie a que un importante componente de los trabajadores sindicalizados tenga eventual interés de adherirse, fundamentalmente por ser una organización de izquierda y que, entre otros propósitos tiene “la defensa de la clase trabajadora”.

En apariencia, sería mucho más atractivo para los sindicatos si se considera que, a diferencia del PAN y el PRI, los estatutos perredistas no establecen un alto nivel de verticalismo en los órganos del gobierno del partido, sino más bien una considerable autonomía de los órganos intermedios y de base respecto de los directivos de carácter nacional y estatal, lo que evidencia el propósito organizativo inclusión y autonomía de sus corrientes y grupos internos.

Por ejemplo, se establece que la democracia en el partido implica el “respeto a la disidencia”. Además supone que la “representación proporcional” se aplica como criterio para la integración de los órganos de gobierno más importantes del partido, que son los consejos estatales y el consejo nacional (Estatutos del PRD, artículos 92 y 118).

Sin embargo, como se ha visto en la última década, el problema no es en sí el marco institucional que supone el reparto proporcional, sino el método de elección de consejeros, pues no hay reglas definidas y cuando las acuerdan los grupos, casi nunca se cumplen, por lo cual las elecciones, desde 1999 a la fecha, resultan muy impugnadas en los órganos internos y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por alguna de las partes o bien los cargos se definen en base a negociaciones de “segunda ronda” y al margen de los estatutos.

Ahora bien, si las fracciones fundadoras del partido tienen serios problemas para defender sus espacios, resultaría complicado para un hipotético grupo sindical emergente,

tener algo asegurado. Tendrían que sumarse los líderes obreros a alguno de los grupos en disputa y su *agenda* estaría subsumida a la negociación al interior de una fracción y más aún, el éxito de sus propuestas “sindicalistas” quedaría en la incertidumbre ante la necesidad de consensos entre corrientes o fracciones.

Por otro lado, la inscripción al PRD debe realizarse en los “comités de base”, cuya jurisdicción territorial se define en el nivel municipal o delegacional, en el caso de la Ciudad de México. Su alcance puede ser por colonia, barrio, unidad habitacional hasta llegar al municipio. Los comités de base tienen facultades para elegir mediante el voto secreto y directo a sus dirigentes y tienen autorización para distribuir propaganda del partido y hacer la suya propia (Estatutos del PRD, artículo 38).

Esta desregulación organizativa va mucho más lejos y les permite a los militantes organizarse en un comité de base que corresponda a una agrupación social, civil e institución pública (Estatutos del PRD, artículo 36). En este caso, un sindicato, una federación sindical o una confederación de sindicatos, no se podrían afiliar al PRD, no sólo por el tema de los incentivos, sino porque La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) prohíbe que los sindicatos entreguen aportaciones a los partidos o candidatos. Por otro lado, la Ley General de Partidos Políticos (LEGEPA) prohíbe a las “organizaciones gremiales” formar parte de los partidos¹.

Sin embargo, los estatutos del PRD privilegian, con la idea de los comités de base, la adhesión de grupos porque no contemplan la inscripción individual y directa al partido. Desde una perspectiva “sindicalista”, en la mayor parte de las unidades territoriales donde hay grupos de trabajadores organizados formalmente, como puede ser la zona de maquila en el norte de México o el corredor industrial del Estado de México Toluca-Lerma, habría incentivos para inscribirse al PRD dadas las circunstancias.

Empero, este partido llegó tarde, en términos históricos, para su encuentro con los trabajadores sindicalizados, ya que en su mayoría, están *organizados* o afiliados a estructuras sindicales donde manifestar preferencias partidistas diferentes al PRI, puede

¹ El artículo 401 de la LEGIPE señala no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. A su vez, artículo 2 de la LEGEPA establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjera

implicar el despido o algún tipo de sanción velada. En este sentido, la “libertad sindical” en México tiene importantes limitaciones (Santos, 1999; Muñoz, 2006: 33-155).

Como se verá en el segundo apartado, en estos escenarios impera el sindicalismo corporativo que, aunque puede ser de “membrete” o genuino, está controlado por las grandes centrales obreras adheridas al PRI en términos organizativos y políticos, como la CTM, la CROM o la FTSE. Asimismo, los patrones en estos espacios se sienten tranquilos de tener interlocución con estructuras organizativas que privilegian “la estabilidad” del empleo, sobre la lucha ideológica o reivindicaciones distintas la esfera de los centros de trabajo.

Ahora bien, en el marco de la pirámide de gobierno partidista dentro del PRD, el “congreso” es la autoridad suprema del partido, pero sus funciones se limitan a aprobar reformas de los estatutos, la declaración de principios y el programa del partido (Estatutos del PRD, artículo 121). Después del “congreso”, el “consejo” es la autoridad que sigue en la jerarquía, el cual está conformado, entre otras personas, por el secretario general del partido, los expresidentes nacionales, los presidentes de los comités estatales, representantes de los congresos estatales y federales, entre otros. Este órgano tiene importantes problemas de legitimidad porque buena parte de los ex presidentes del PRD están fuera del partido.²

Son funciones del Consejo Nacional elegir al comité nacional, excepto al presidente y secretario general, quienes son elegidos bajo el voto universal, directo y secreto, y convocar a la elección de dirigentes y candidatos a nivel nacional (Estatutos del PRD, artículo 93). En esta lógica, los liderazgos sindicales se verían obligados a una fuerte movilización para colocar a sus representantes en los órganos de gobierno más importantes del partido y al final apenas obtener algunos espacios. Incluso en la hipótesis de que un dirigente del ámbito laboral consiguiera tener presencia en los órganos de gobierno partidista, su arribo y sostén, no podría estar en el espacio gremial, sino en una coalición de grupos de diferente naturaleza social³.

² Son los casos de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles y Leonel Cota Montaña.

³ Dos casos significativos son Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), quien llega como diputado federal del PRD en la LXI Legislatura como “candidato externo” o el caso de Alejandra Barrales Magdaleno, ex dirigente de la Asociación de Sobrecargos de Aviación (ASA), quien es diputada federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, más que por

El comité Ejecutivo Nacional en este esquema apenas tiene una autoridad de carácter administrativo y sólo puede “controlar” a los comités estatales con bajos niveles de votación. Esto es así porque prácticamente todos los cargos de dirigencia se asignan por voto universal, directo y secreto cada tres años. Estos cargos son, además de la presidencia y la secretaria general, en el nivel nacional, los mismos puestos en los niveles estatal y municipal; consejerías nacionales elegidas en los estados; integrantes de los Congresos nacional y estatales, entre los más importantes (Estatutos del PRD, artículos 104 y 105).

Como órgano de apoyo al Comité Nacional, existe un Secretariado Nacional, que es en realidad órgano propiamente ejecutivo, encargado de desarrollar las labores administrativas, de organización y de realizar labores políticas específicas. Éste cuenta con la autoridad para que se haga lo conducente para darle presencia al partido en todo el territorio, abriendo las relaciones políticas con grupos organizados y sectores sociales, además de aplicar resoluciones, informar, presentar propuestas y planes de trabajo a órganos como el Consejo Nacional y la Comisión Política Nacional.

Además, el Secretariado tiene la facultad para remover a los miembros de las direcciones estatales y municipales, nombrar direcciones provisionales así como para solicitar al Comisión Política Nacional sanciones para los miembros del partido que, se juzgue hayan ido en contra de sus estatutos (Estatutos del PRD, artículos 98 bis, 99, 100, 101, 102 y 103). Empero, como los integrantes de este Secretariado son elegidos por el Consejo Político Nacional, no se trata de un órgano burocrático que sigue líneas de autoridad más o menos definidas, sino que en los hechos responde a las múltiples interacciones entre los grupos o corrientes de opinión que tienen más presencia. En estos términos, resulta complicado que una eventual corriente “sindicalista” pudiera predominar o siquiera tener un espacio seguro o en Consejo o en el mismo Secretariado.

Como si no fuera suficiente, el hecho de que el presidente y secretario general del partido no tengan atribuciones ejecutivas, el Secretariado Nacional no tiene competencias de orden político; éstas le corresponden a la Comisión Política Nacional, la cual tiene como principales tareas definir la línea política, analizar la situación del partido, presentar propuestas a órganos como el Consejo Nacional, así como ratificar y rectificar las

méritos sindicalistas, por su pertenencia a la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) y su cercanía al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.

resoluciones del Secretariado Nacional. Dado que la Comisión se integra por las fracciones internas, existen diversos problemas de coordinación y cooperación.

En lo que respecta a las candidaturas, en estados o municipios donde el PRD no tiene ninguna presencia, se impulsan candidatos o planillas de “unidad”. Este fenómeno también se da en el caso de liderazgos *consolidados*, fundamentalmente en los niveles nacional y estatal. Bajo esta lógica se puede entender que algunos personajes hayan sido candidatos a senador, gobernador o a la presidencia sin reclamos o competencia. En tanto, los candidatos plurinominales son elegidos por los consejos estatales y nacional (Estatutos del PRD, artículo 273). En este escenario, la seguridad de una candidatura “sindicalista” está sujeta a una serie de negociaciones donde no hay certezas sobre el resultado. Desde luego, esto implica un problema de institucionalidad partidista y de incentivos organizativos⁴.

Justamente, en el marco de la institucionalidad y los incentivos partidistas para grupos o individuos, la estructura territorial del PRD no tiene un funcionamiento óptimo, pues ha habido casos donde los comités de base que no operan, por lo cual, una cantidad no definida de dirigencias en los comités municipales del partido no se renuevan por dos o más periodos; lo mismo ocurre en algunos comités estatales (encargados, entre otras cosas, de ejercer los recursos económicos y organizar las elecciones internas) que no se encuentran debidamente constituidos.

Esto ocurre particularmente en entidades donde el PRD no tiene muchas posibilidades de ganar ni siquiera presidencias municipales, como Chihuahua, Tamaulipas, Colima, Campeche o Yucatán. Si consideramos que la fuerza organizativa de los sindicatos se basa en federaciones estatales o confederaciones de carácter “nacional”, por qué sumarse a un partido que tiene un alcance regional y perder las prerrogativas en el PRI, cuya institucionalidad está consolidada.

Si hay problemas para seleccionar candidatos donde el PRD no tiene posibilidades de triunfo, en espacios donde pueden competir, el problema es más significativo. En estos casos, los principales líderes no logran definir el método óptimo para obtener el consenso

⁴ De acuerdo con Panebianco, la evolución organizativa de los partidos, se produce en tres fases: génesis, institucionalización y madurez. La primera se caracteriza por un sistema en el que la cooperación al interior del partido se basa en la solidaridad de sus integrantes, pues el objetivo es la realización de la causa común; la institucionalización, implica la transición hacia un sistema de intereses y supone la burocratización de las decisiones y significativo apego de militantes y dirigentes a las normas establecidas (Panebianco, 2009).

entre los grupos y al mismo tiempo seleccionar a los “mejores” candidatos o candidatas⁵. Para elegir a los candidatos el PRD utiliza varios métodos: los líderes de las principales corrientes se reservan cierto porcentaje candidaturas, fundamentalmente para la Cámara de Diputados; también, la dirigencia del partido recurre al mecanismo de elección abierta a la militancia; a la planilla de unidad, y últimamente a la encuesta.

Si los procesos son sin elección abierta, las listas deben aprobarse en forma consensada en una Comisión de Candidaturas Plural, previa consideración de la Comisión Política Nacional y los consejos Nacional o estatales. Si el proceso es con elección a población abierta o sólo para militantes, los comités Nacional o estatales, a lo largo de todo el país, celebrarían procesos de elección interna, para ser luego aprobados por la Comisión Nacional Electoral (Estatutos del PRD, artículo 273).

Como se mencionó antes, muchos líderes sindicatos son invitados como “candidatos externos”, lo cual supone una estrategia electoral de proyección representativa de lo “laboral”, pero generalmente los líderes de los trabajadores invitados son del grupo autodenominado “independiente” del sindicalismo mexicano, el cual, sobra decir, son la minoría de entre los dirigentes sindicales.

Por otra parte, lo que se ha visto en el caso de la actuación legislativa de los “candidatos externos”, es que terminan debilitando la actuación política del PRD y ahondando las divisiones dentro del partido, lo cual incluye a los candidatos “sindicales”. En particular porque la dirigencia del partido debe cuidar el equilibrio entre las corrientes y las cuotas de todo tipo, externas y de género.

Esto suele dejar a la organización sin candidatos con experiencia política, de manera que en este proceso, los líderes del PRD se enfrentan de forma recurrente al dilema de tener políticos profesionales en cargos de tipo legislativo y ejecutivo o mantener las candidaturas por cuota que representan una gran carga simbólica de pluralidad y el compromiso con algún movimiento de carácter ciudadano, con mucha popularidad generalmente, pero con escasa experiencia política. En esta lógica, tampoco los dirigentes

⁵ Este problema empieza afectar al PRI y al PAN, que cada vez afrontan más dificultades para definir los métodos más óptimos para seleccionar candidatos en todos los niveles de gobierno. Tanto las “candidaturas de unidad” como la competencia a través del voto directo y secreto de la militancia, genera confrontación y polarización entre los contendientes. Sin embargo, estos a partidos presentan conflictos de selección de candidatos con mucho menos frecuencia que el PRD.

del PRD asumen como un importante activo político-electoral a los trabajadores sindicalizados o a sus líderes⁶.

Por otra parte, si bien los “candidatos externos”, pueden fortalecer la representatividad del partido entre diversos grupos sociales que no tienen cabida ni en el PRI ni en el PAN, muchas veces debilitan la acción legislativa y de gobierno del PRD, bien porque legislan sobre sus *particularismos*, bien porque no tienen ninguna experiencia política o bien porque no son capaces de vincular sus agendas de grupo con la perspectiva programática o ideológica del partido.

Un riesgo aún más grande es que la mayor parte de los candidatos ciudadanos tienen escasa preparación política además de que no conocen al partido ni su dinámica interna, por lo que muchas veces terminaron confrontándose con los comités estatales o con las expresiones políticas regionales de cada municipio.

Tales candidaturas no siempre le permiten al partido maximizar el voto, entre otras cosas porque no están respaldadas por un trabajo previo de capacitación, programación y planeación de una campaña política y menos aún sin el funcionamiento formal de la estructura del partido a lo largo del territorio. En este sentido, el “candidato externo” casi siempre “está solo”, en particular en las entidades donde el PRD no tiene una significativa presencia electoral a nivel local.

Bajo esta óptica, se puede considerar que el modelo del PRD es el resultado de la visión que plantearon los sus líderes fundadores, sobre todo refleja el tipo de “unidad” organizativa que esperaban construir. Por un lado, la idea fue unificar a las izquierdas muy distintas en concepción y propósito, pero, sobre todo, sumar, *sobre la marcha*, incorporar a grupos, movimientos o colectivos con interés en sumarse a la estructura electoral y de promoción del voto del partido; sin embargo, ello también significó que el sistema de incentivos para esos actores-grupos, resulte favorable sólo en las plazas donde el PRD tiene cierta presencia electoral o bien cuando los líderes otorgan una “candidatura externa” ubicada en una posición “segura” dentro de las listas municipales, estatales o federales.

⁶ El Consejo Nacional y los consejos estatales pueden nombrar candidatos externos hasta en un 20 por ciento del total de las candidaturas que deba postular el partido a un mismo órgano político, como puede ser el caso de las cámaras de Diputados y Senadores o municipios. Ahora bien, si los consejos acuerdan por mayoría “calificada” de sus integrantes presentes, el porcentaje se puede ampliar. También es posible que los consejos, en colaboración con la Comisión Política Nacional propongan candidatos externos a la Presidencia o para las gubernaturas (Estatutos del PRD, artículo 282).

En los primeros años esto fue un crédito para ciertos sectores sociales, sin embargo, con el paso de los años, las corrientes han copado dichas posiciones. Por ello, no se puede incorporar a los sindicatos o a los sindicalistas a partir de una supuesta representatividad, sino en base a su capacidad de ganar votos. Bajo esta lógica, el establecimiento de un *punto* permanente entre trabajadores organizados e izquierda partidista es prácticamente imposible, como lo es también para otros grupos, como los campesinos, jornaleros o incluso empresarios de alguna actividad específica.

Se advierte, más bien, que el propósito del modelo organizativo del PRD es que en su interior se reflejen los ejes de conflicto social y las temáticas que para el partido podrían tener empuje electoral. Igualmente, mantener contacto con las fuerzas sociales en lucha de la coyuntura política y social y generar así una arena para plantear demandas sociales de diversa índole.

2. El peso del modelo de regulación sindical y sus efectos políticos

Si bien el modelo organizativo del PRD es poco atractivo para los trabajadores organizados, ha tenido un peso mayor el modelo de regulación laboral en el distanciamiento histórico entre sindicatos e izquierda partidista. El modelo de regulación laboral mexicano desde mediados de la década de los treinta, privilegió la defensa de los derechos colectivos sobre las libertades individuales y les imprimió un sesgo radical, al menos en la letra, debido al contexto revolucionario en el que se diseñó entre 1917 y 1931, supuestamente con la intención de favorecer la expansión de los sindicatos y la acción colectiva como principal vía para el mejoramiento de la situación de los trabajadores.

Sin embargo, esta disposición regulativa se acompañó de un fuerte control estatal como antídoto de la posibilidad de una genuina autonomía sindical y un eventual conflicto económico entre patrones y trabajadores. Esta ambigüedad jurídica, en el marco de un régimen político autoritario, dificultó, si no es que impidió, a lo largo de la historia posrevolucionaria de los siglos XX y XXI, la acción colectiva independiente y sentó las bases de un arreglo de tipo corporativo que continúa vigente, a pesar de las críticas que suscitó, sobre todo a partir del inicio de la transición política a la democracia.

Esto tuvo como resultado, en el ámbito económico-laboral, el otorgamiento legal, en apariencia, a los sindicatos un poder prácticamente ilimitado para imponer la contratación colectiva y la huelga indefinida a los empleadores. Sin embargo, el resultado es de claros oscuritos: desde la existencia de amplios contingentes de trabajadores sin representación auténtica de sus intereses, como es el caso de los trabajadores de la construcción y en las micro y pequeñas empresas al igual que los jornaleros agrícolas, hasta sindicatos que han logrado conservar contratos colectivos altamente benéficos (aunque decrecientes) para los trabajadores de las empresas estatales y privadas de carácter monopolístico o dependencias gubernamentales, como en el sector del petróleo, telefonía fija, la energía eléctrica y la educación, donde los liderazgos sindicales tienen no pocos privilegios y un amplio control de los procesos de trabajo y de las relaciones políticas, de carácter colectivo, de los trabajadores agremiados.

Cuatro aspectos institucionales resultan claves para explicar las características predominantes en el sindicalismo mexicano y sus consecuencias negativas para que los trabajadores organizados puedan ejercer una autonomía en el ámbito de las relaciones laborales y mucho menos en marco de su eventual relación con diferentes partidos políticos:

1) La división de regímenes legales: trabajadores en general y trabajadores del Estado, a lo cual corresponde el apartado A y el apartado B del artículo 123 constitucional, respectivamente; jurisdicción federal vs. jurisdicción local, que establece la propia Ley Federal del Trabajo; y el uso restrictivo desde la autoridad laboral de las tipologías organizativas, tales como sindicatos gremiales, de empresa, de industria, etcétera, de forma que son los jueces de lo laboral quienes determinan el *estatus* de un sindicato antes de ser autorizado legalmente. Esto ha generado tanto a divisiones como a unidades artificiales en el seno del sindicalismo que operan como “camisas de fuerza” dificultando su reestructuración a partir de los requerimientos de los trabajadores. En esquema fragmentación representativa, resulta complicado para un partido nuevo aspirar a establecer una alianza de largo alcance con el sindicalismo mexicano.

2) Los poderes “coactivos” asignados a los sindicatos en la legislación laboral en materia de agremiación, contratación colectiva y huelga. Al respecto, la ley laboral señala que los sindicatos titulares de un contrato colectivo de trabajo, una vez reconocidos por la

autoridad competente, tienen la prerrogativa de participar en el ciento por ciento de las contrataciones “sindicalizables”, así como de imponer a sus representados el estallido, la continuación y, en su caso, la conclusión de una huelga. Los resultados sobre el particular han sido de altibajos para patrones y trabajadores: por un lado, los sindicatos han expandido su presencia en casi todos los sectores, en términos generales, han logrado imponer coactivamente la negociación de las condiciones de trabajo, a veces en contra de la voluntad de los empleadores pero, también, de los supuestos representados⁷.

En el ámbito político, estos poderes “coactivos” han sido un factor de intimidación y sanción para trabajadores o grupos de trabajadores que participan abiertamente actividades políticas que no son avaladas por los líderes sindicales *oficialistas*.

3) Los mecanismos que, contrapesan el “poder legal” reconocido a los sindicatos, también son de carácter normativo y generalmente restringen la autonomía colectiva frente al estado y los empleadores. El más importante de ellos es la exigencia del “registro sindical” de cualquier organización y del de las dirigencias gremiales ante la autoridad laboral, a través de lo que se conoce como la “toma de nota”, bien por conducto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o de las juntas locales en cada una de las 32 entidades federativas. En el caso de los sindicatos del apartado B del artículo 123 constitucional, la autoridad que da el registro a los sindicatos es el Tribunal Federal de Conciliación y

⁷ Incluso han conseguido evitar la modernización de las empresas o entidades gubernamentales, porque afecta algunos derechos adquiridos o porque implica recortes de personal o disminución de horas de trabajo (destaca el del Sindicato Mexicano de Electricistas [SME] y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación [SNTE]). También se cuentan los casos extremos en contrario, es decir, aquellos sindicatos que aceptan incondicionalmente las disposiciones patronales a pesar de la opinión de sus representados. Esto ha redundado en una merma en su capacidad de negociación que se refleja en la caída salarial con respecto a la inflación. Esta incondicionalidad sindical frente a los empleadores y el férreo control de los dirigentes sobre los trabajadores también se ha traducido en la creación de “sindicatos de membrete” que ofrecen “contratos de protección”. En estos casos, los supuestos afiliados generalmente no saben que están sindicalizados, no conocen quiénes son sus dirigentes ni los contratos colectivos. Los empresarios aceptan estos arreglos, aunque no siempre en forma voluntaria, para prevenir que la planta laboral quiera formar un sindicato genuino e independiente. Generalmente tienen el aval del gobierno porque por lo regular se radican en sectores económicos con una considerable rotación de personal. Con estos contratos los empleadores no tienen que pagar las remuneraciones no salariales que marca la ley, tales como aguinaldo, vacaciones, días festivos o incluso pueden eludir las responsabilidades en materia de seguridad social, como es el caso del servicio médico y vivienda. Solamente pagan una cuota mensual o anual a los dirigentes que se ostentan como titulares del contrato colectivo. Dicha cuota la pone el empresario la contempla en su gasto corriente o bien, se la descuenta a los mismos trabajadores que a veces lo consienten con tal de conservar el empleo. Estos contratos predominan sobre todo en el ramo de la construcción, en la industria maquiladora, hoteles y restaurantes y en pequeñas empresas de los sectores de la educación privada y del manufacturero.

Arbitraje y depende de la Secretaría de Gobernación; en las entidades federativas existe una figura similar y depende de la Secretaría General de Gobierno.

Gracias a estas facultades el gobierno ha podido seleccionar a las dirigencias favorables a sus políticas y al PRI durante el periodo que gobernó en la presidencia hasta el año 2000. Igualmente, los empresarios han podido incidir en el tipo de interlocutores sindicales que son afines a sus intereses. Asimismo, a través de estas instituciones (juntas y tribunales de conciliación y arbitraje), los titulares del ejecutivo a nivel nacional y en los estados, pueden decidir si un líder o sindicato puede ser reconocidos o desconocidos. Da igual que ganen elecciones internamente, su estancia “legal” dependerá de lo que digan los jueces gubernamentales. ¿Qué dirigente sindical tendría condiciones para sumarse a la izquierda partidista? También mediante estas instancias, que fungen como tribunales laborales, se admite o rechaza el emplazamiento a huelga y su eventual estallido. Esto le ha permitido al gobierno controlar políticamente a los liderazgos.

4) Las ausencia de normas que referidas al manejo interno de los asuntos sindicales, ha generado una significativa “fragilidad en materia de rendición de cuentas”, de los líderes hacia los trabajadores y ha dado lugar a la imposibilidad de establecer una reglamentación mínima en lo que respecta al eventual funcionamiento democrático de los órganos de gobierno sindical. Esto se ha traducido, salvo casos excepcionales (como el extinto SME, los telefonistas, sindicatos universitarios –de la UNAM, la UAM o la Universidad Iberoamericana- y algunos gremios del sector automotriz -Volkswagen y Nissan Cuernavaca), en nula o mínima participación de los trabajadores en la toma de decisiones fundamentales, tales como la elección de dirigentes del comité central o de los comités seccionales, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga. En este escenario, es más que arriesgado para los líderes sindicales *privilegiados* sumarse a una opción política que no consienta el partido en el gobierno.

3. El perfil de los diputados del PRD y su relación con el sindicalismo

Con la finalidad de conocer el perfil de los diputados federales del PRD, así como la relación del partido con sindicalistas, en este apartado se elaboró una base de datos en la que se incluye el perfil de los diputados perredistas de las LVII, LVIII, LXI y LX; para tal efecto, se consideraron seis variables: edad, lugar de nacimiento, escolaridad, profesión,

organizaciones y partidos a los que pertenecieron y si forman parte de alguna agrupación sindical. La base está conformada por un total de 376 diputados, de los cuales 120 (32%) corresponden a la LVII legislatura, 49 (13%) a la LVIII, 88 (23.4%) a la LIX y 119 (31.6%) a la LX.

1. No. de diputados por legislatura en el PRD (1988-2018)

Legislatura (años)	No. de Diputados
LIV (1988-1991)	22
LV (1991-1994)	41
LVI (1994-1997)	71
LVII (1997-2000)	125
LVIII (2000-2003)	53
LIX (2003-2006)	97
LX (2006-2009)	127
LXI (2009-2012)	63
LXII (2012-2015)	104
LXIII (2015-2018)	60

FUENTE: Sistema de Información Legislativa (SIL): www.sil.gobernacion.gob.mx/

Se eligieron estas legislaturas porque son cuatro periodos en los que más diputados ha tenido esta fuerza política desde arribó a la Cámara de Diputados, en 1988. Así, entre 1988 y 1997 sumaron solamente 134 legisladores; y entre 2012 y 2018, la cifra llegó a 164. En cambio en el periodo analizado, suman 402 diputados.

En cuanto a la edad, el mayor número de diputados se encuentra en el rango que va de los 51 a los 60 años, 141 (37.5%), seguido por el rango de los que tienen entre 41 y 50 años, mismos que representan el 29% (109). En todas las legislaturas esta tendencia se conserva, salvo en la LX, donde el rango que predomina es el que va de los 41 a los 50 años.

2. Rango de edad de los diputados del PRD

Edad	Legislatura				Total
	LVII	LVIII	LXI	LX	
26-30	0	0	1	3	4
31-40	5	2	16	25	48
41-50	21	18	22	48	109
51-60	55	20	31	35	141
Más de 60	27	6	13	6	52

Información No Disponible	12	3	5	2	22
Total	120	49	88	119	376

Fuente: Sistema de Información Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Por lugar de nacimiento, el número de diputados perredistas nacidos en el Distrito federal ocupa el número más alto 77 (20.5%), seguido de Michoacán con 34 (9%) y el Estado de México con 29 (7.7%), sin embargo la información de un buen número de diputados no se encuentra disponible (92, lo que representa el 24.5%). Por legislatura, la tendencia continúa, con ligeros cambios entre Michoacán y el Estado de México.

Respecto a la escolaridad de los perredistas, cabe destacar que un buen número de ellos cuenta con estudios de licenciatura, 254 (67.5%) —de los cuales el 200 (78.7%) obtuvieron el grado, mientras que los 54 (21.3%) restantes no—; 34 (10.4%) cuentan con estudios de nivel medio superior y 31 (8.2%) tiene estudios de posgrado —23 (74.2%) de ellos tiene estudios de maestría y los 8 restantes (25.2%) de doctorado—; sólo 7 (1.9%) tienen únicamente estudios de educación básica y del resto no se tiene información. Por legislatura el porcentaje de diputados que cuentan con estudios de posgrado es mayor en la LIX y LX, sin embargo en esta última los diputados que cuentan solamente con educación básica es el más alto respecto a las otras.

3. Escolaridad

Escolaridad	Legislatura				Total
	LVI	LVII	LXI	LX	
	I	I			
Básica	0	0	0	7	7
Media Superior	14	6	9	10	39
Estudios de licenciatura	12	5	13	24	54
Licenciatura	66	33	53	48	200
Maestría	0	0	7	16	23
Doctorado	1	1	2	4	8
Información no disponible	27	4	4	10	45
Total	120	49	88	119	376

Fuente: Sistema de Información Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Por profesión, aquellos diputados con estudios en Derecho y diferentes carreras de Ciencias Sociales y Humanidades⁸, tienen una participación muy significativa, pues representan los más altos, 62 y 43 (16.5% y 15.9%), respectivamente—; de los últimos cabe destacar que 17 (4.5%) tienen estudios en Ciencias Políticas y/o Administración Pública. La carrera de Economía ocupa el tercer lugar con 34 (9%) diputados, seguido de los ingenieros (31 lo que representa el 8.2%,) y los médicos cirujanos (18, que equivale al 4.9%,). Por legislatura, la tendencia se mantiene, sin embargo en la LVIII el número de ingenieros representa un porcentaje más alto de legisladores (14.3%).

En cuanto a las organizaciones de pertenencia anterior, se hizo una clasificación de 16⁹ opciones; del total de diputados, 95 (25.3%) pertenecieron a una asociación civil, misma que representa el porcentaje más alto de una membresía de tipo asociativa. El segundo lugar lo ocupan aquellos que tuvieron alguna relación con sindicatos de diferente naturaleza (71 que constituye el 19%); un grupo importante fueron dirigentes gremiales en el sector público y privado (46, es decir el 12.2%) o bien fueron parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (25, lo que equivale al 6.6).

En tercer lugar, se encuentran los que formaron parte de alguna asociación vecinal (39 que representan el 10.4%), seguido por las agrupaciones de protesta (29, 7.7%) y los líderes campesinos (28, 7.4%); los que pertenecieron a alguna organización empresarial son 19 (6.1%), de los cuales solamente uno no fue dirigente en la iniciativa privada. El resto de los legisladores han sido parte de grupos de reflexión política, fueron dirigentes de una asociación de comerciantes, miembros de ONG, integrantes de una organización en defensa de los Derechos Humanos, miembros de alguna institución académica o bien, pertenecieron a un grupo guerrillero (49, 13%).

El perfil de la membresía se mantiene en general en todas las legislaturas, sin embargo aquellos que pertenecieron a algún sindicato tuvieron mayor presencia en la número LVIII, comparado con los que formaron parte de una A. C. (30.6 y 18.3% respectivamente).

⁸ Se considera Sociología, Antropología, Ciencias de la Comunicación, Filosofía, Historia, Estudios Latinoamericanos, Letras hispanoamericanas y Ciencias Políticas y Administración Pública

⁹ A.C., Líder estudiantil, Líder Campesino, SNTE, Agrupación Política Nacional, Org. Empresariales, Asociación Vecinal, Líder sindical, Grupo guerrillero, Dirigente de asociación de comerciantes, Miembro de una Institución Académica, Agrupaciones de protesta, ONG, Integrante de una organización en defensa de los DDHH, Grupo de reflexión política, Dirigente empresarial.

4. Organizaciones a las que pertenece (Por Legislatura)

Organizaciones a las que pertenece	Legislatura				Total	%
	LVII	LVIII	LXI	LX		
A.C.	37	9	17	32	95	25,3
Líder sindical	19	9	10	7	45	12,2
Asociación Vecinal	18	4	6	8	36	10,4
Agrupaciones de protesta	16	6	4	2	28	7,7
Líder Campesino	12	6	5	5	28	7,4
SNTE	9	6	5	5	25	6,6
Líder estudiantil	11	2	8	1	22	5,8
Dirigente empresarial	8	1	5	5	19	4,8
Miembro de una Institución Académica	10	3	1	2	16	4,5
Grupo guerrillero	6	0	2	1	9	2,7
ONG	3	1	5	0	9	2,1
Integrante de una organización en defensa de los DDHH	3	0	3	0	6	1,3
Agrupación Política Nacional	2	0	1	1	4	1,1
Dirigente de asociación de comerciantes	2	1	0	0	3	0,8
Grupo de reflexión política	2	0	0	0	2	0,5
Org. empresariales	1	0	0	0	1	0,3
Información no disponible	25	12	30	59	126	33,5

Fuente: Sistema de Información Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Los partidos de pertenencia anterior conforman otra variable. Los partidos de los que formaron parte los legisladores perredistas, en su mayoría son formaciones de izquierda que se crearon en los años 70 y 80, como son el caso del Partido Comunista Mexicano (PCM), posteriormente transformado en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y más adelante Partido Mexicano Socialista (PMS). Igualmente es el caso del partido “satélite” de izquierda, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que a finales de los 80 se transformó en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN); en esta misma lista se ubica también al único partido trotskista que hubo en México, que es caso del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y a la formación reformista fundada por Heberto Castillo, El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). En estos casos un total de 138 (36.6%) diputados pertenecieron a dichas agrupaciones de izquierda.

En la desagregación a la membresía de los diputados perredistas a las anteriores formaciones de izquierda, cabe mencionar que 53 (14.1%) pertenecieron al PMS. En tercer

lugar se ubica el Partido Socialista Unificado de México en el que participaron 32 (8.5%), seguidos por aquellos que fueron parte del PCM (23, 6.1%) y al PMT (19, 5%). Por legislatura, resulta importante señalar que el PSUM ocupa el segundo lugar en la número LVIII, al tiempo que el PMT también es segundo lugar en la LVII. Con respecto al PRI el número de diputados perredistas que pertenecieron a este partido es 40, lo que representa el 10.6%.

Estos porcentajes de la membresía de los diputados perredistas a partidos políticos no pueden considerarse determinantes para hablar de tendencias o perfiles porque los datos revisados no arrojan ninguna información en 104 casos (27.7%) sin embargo vale la pena considerar que de la información de la que se dispone una minoría dijo haber pertenecido al PRI.

5. Partido de pertenencia anterior (Por Legislatura)

Partidos de pertenencia anterior ¹⁰	Legislatura				Total	%
	LVII	LVIII	LXI	LX		
PMS	20	8	13	12	53	14,1
PRI	13	7	11	9	40	10,6
PSUM	10	8	8	6	32	8,5
PCM	5	5	7	6	23	6,1
PMT	14	1	3	1	19	5
PAN	3	1	3	2	9	2,4
FDN	3	1	2	0	6	1,6
PRT	2	2	1	1	6	1,6
PST	5	0	0	0	5	1,3
Partido Foro Democrático	4	0	0	0	4	1,1
Convergencia	1	0	0	0	1	0,3
Convergencia por la Democracia	1	0	0	0	1	0,3
Partido Obrero Agrario Mexicano	0	0	1	0	1	0,3
PCD	0	0	1	0	1	0,3
PPS	1	0	0	0	1	0,3
PRP	1	0	0	0	1	0,3
PRS	0	0	1	0	1	0,3
PSU	1	0	0	0	1	0,3
PT	0	0	0	1	1	0,3

¹⁰ PMS Partido Mexicano Socialista, PRI Partido de la Revolución Institucional, PSUM Partido Socialista Unificado de México, PCM Partido Comunista Mexicano, PMT Partido Mexicano de los Trabajadores, PAN Partido Acción Nacional, FDN Frente democrático Nacional, PRT Partido Revolucionario de Trabajadores, PST Partido Socialista de los trabajadores, PCD Partido de Centro Democrático, PPS Partido Popular Socialista, PRP Partido Revolucionario del Proletariado, PRS Partido de la Revolución Socialista PSU Partido Socialista Unificado, PT Partido del Trabajo.

Información no disponible	37	12	25	30	104	27,7
---------------------------	----	----	----	----	------------	-------------

Fuente: Sistema de Información Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Reflexiones finales

El desarrollo histórico de la izquierda partidista en México, en relación con el sindicalismo, no fue a la par. Los primeros tuvieron serios problemas de continuidad organizativa, sea porque había conflictos entre ellos (comunistas vs troskistas, por ejemplo) o porque fueron objeto de represión. Cabe recordar que el Partido Comunista fue proscrito en México en 1940, a partir del gobierno de Manuel Ávila Camacho, hasta que la reforma política de 1977 le permitió participar en las elecciones federales de 1979.

Por su parte, los trabajadores organizados, desde que se agruparon en las primeras centrales nacionales (la Casa del Obrero Mundial en 1912, la CROM a partir de 1918, o la CTM a partir de 1936) establecieron una alianza política con los gobiernos en turno.

Esto condicionó las probabilidades de que el PRD, surgido en 1989 como síntesis de las principales organizaciones históricas de la izquierda, pudiera encontrar en los trabajadores organizados un *nicho* natural para nutrirse de una base social que, en otros países, ha constituido la el soporte clave de la consolidación de partidos de corte izquierdista, como es el caso de las democracias europeas o incluso de Estados Unidos.

Si bien podemos señalar que la relación entre el PRD y los trabajadores es sumamente débil, debido a los desencuentros políticos a lo largo de la historia del siglo XX, también es un hecho que la estructura organizativa del partido en lo relacionado con la afiliación, la organización jerárquica y la asignación de candidaturas, no es atractiva en perspectiva electoral, para los dirigentes sindicales y sus organizaciones. Primero porque el alto nivel de conflicto interno dentro del PRD, y segundo, porque su techo electoral, en la mayor parte del país, es de segunda o tercera fuerza.

Incluso en algunas entidades del norte del país, apenas consigue votos para mantener su registro en el nivel estatal. Incluso podría ser que las centrales sindicales, más importantes del país (como la CTM, la CROC o la CROM), en términos potenciales, tengan más que aportar al PRD, que viceversa. Entonces ¿por qué aliarse con la tercera fuerza

electoral? En términos prácticos, es más racional buscar alianzas o con la primera fuerza electoral o con el partido que gobierna en la entidad respectiva.

Este esquema trunco de relaciones entre organizaciones sindicales y el PRD se refuerza a partir de la estructura de control político que genera el el modelo mexicano de regulación laboral. Sobre todo si partimos de que el Ejecutivo, a nivel nacional y en los estados, a través de las juntas de Conciliación y Arbitraje, califica la legalidad de las elecciones internas y puede otorgar el aval sobre la titularidad de los contratos colectivos. Este tipo de institucionalidad político-sindical condiciona de manera significativa las relaciones políticas de los líderes gremiales con los partidos y con el gobierno turno, de forma que resulta arriesgado buscar alianzas con el PRD cuando en la mayoría de los estados ni siquiera alcanza ser la segunda fuerza.

Ahora bien, a partir de la revisión de los currículums de los diputados del PRD de las LVII, LVIII, LXI y LX legislaturas, podemos encontrar que más de 12% de ellos (45 de 126), tienen antecedentes de corte sindicalista. Pero cabe preguntarse si dichos legisladores representan en términos de semejanza o de compromisos a los trabajadores de las organizaciones de las que forman parte. O también si estos legisladores se pueden considerar portavoces de sus pares en el mundo del trabajo.

Si acaso estos representantes podrán reflejar su postura sindicalista en propuestas relacionadas con la defensa del salario, las prestaciones o los derechos a la salud, la vivienda o la educación. Más aún, podrán defender la continuidad de políticas de subsidios o apoyos directos a grupos socialmente vulnerables. Sin embargo, esta agenda no es particularmente sindicalista y no proyecta la singularidad de lo que podríamos llamar la “diputación obrera” de la izquierda partidista.

Bibliografía

- ALCALDE, Arturo y Graciela Bensusán (coords.) (1999). *Libertad Sindical*. México. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, UAM Iztapalapa, Frente Auténtico del Trabajo.
- BENSUSÁN, Graciela (2006). “Los constreñimientos institucionales de la renovación sindical en México”. Ponencia presentada en el Congreso de Latin American Sociology Association, LASA, mayo – junio.

Estatutos del PRD

Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados – PRD (2005). *Auge y perspectivas de los contratos de protección ¿Corrupción sindical o mal necesario?*. México. PRD-Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados, Friedrich Ebert Stiftung.

LÓPEZ, María Xelhuantzi (2000). *La democracia pendiente. La libertad de asociación sindical y los contratos de protección en México*. México. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

MORALES, Rafael (2009). “El Partido de la Revolución Democrática: un balance intermedio”. En *Este País*. México. Fundación Este País. Septiembre de 2009, número 222.

MUÑOZ Armenta, Aldo (2006). “El sindicalismo corporativo mexicano y los partidos políticos en tiempos de alternancia”. *Nueva Antropología*, vol. XX, núm. 66, julio. México. Conaculta, INAH.

SANTOS Azuela, Héctor (1999). “La autonomía en el radio de acción de los sindicatos. Autonomía colectiva y libertad sindical”. En Alcalde, Arturo y Graciela Bensusán (coords.) *Libertad Sindical*. México. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, UAM Iztapalapa.

VIVERO Ávila, Igor (2006). *Desafiando al sistema la izquierda política en México. Evolución organizativa, ideológica y electoral del PRD (1989-2005)*. México. UAEM-Miguel Ángel Porrúa.